

NULIDAD DE SENTENCIA

La sentencia impugnada habría sido emitida cuando el imputado padecía las consecuencias neurológicas de las lesiones por arma de fuego que se infirió en la cabeza. Es decir, no se tiene certeza si al momento de los hechos padecía de una anomalía psíquica, alteración de la conciencia o de percepción u otros estados patológicos que hayan afectado gravemente su concepto de la realidad y si luego de los mismos el recurrente se encontraba o no imposibilitado de ser interrogado y de comprender en su integridad la decisión dictada en su contra. Entonces, con la finalidad de verificar el primer reclamo del impugnante y el segundo respecto a la real restricción de la capacidad procesal para actuar en juicio del imputado; resulta necesario e inexorable que se ordene la evaluación del imputado por parte de los peritos del Instituto de Medicina Legal, a fin de que formulen una pericia neurológica y una psiquiátrica. Esta última deberá determinar dos aspectos: **i)** si en función a sus antecedentes el recurrente era inimputable a la fecha de los hechos; y, **ii)** si en la actualidad su condición psiquiátrica impide o no que participe del juzgamiento. Para la elaboración de ambas pericias deberán proporcionarse a los especialistas copias certificadas de las evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas que obran en autos. Finalmente, de ser el caso, el imputado deberá ser sometido a una junta médica para determinar si se encuentra en condiciones de participar en el proceso. En ese sentido, se advierte que la Sala Superior, pese a las recomendaciones efectuadas en los certificados médicos legales y la pericia psicológica, no se cercioró que el imputado contara con capacidad procesal para ser sometido al juicio oral, por lo tanto, ha incurrido en la causal de nulidad prescrita en el numeral 1, del artículo 298, del Código de Procedimientos Penales, que establece que se declara la nulidad: “1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisión de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal”. Por lo tanto, es necesario rescindir la sentencia materia de grado, a fin de que el imputado sea evaluado por los especialistas correspondientes y de ser el caso, sea sometido al juzgamiento. Estas pericias deberán llevarse a cabo a la brevedad posible, teniendo en consideración la gravedad del delito materia de imputación, así como también la responsabilidad que el Estado peruano ha asumido internacionalmente ante este tipo de ilícitos penales.

Lima, diecisiete de octubre de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el **representante del Ministerio Público** y el sentenciado **CÉSAR ADOLFO CANALES LÓPEZ** contra la sentencia del 21 de diciembre de 2020, emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó al peticionado como autor del delito contra la vida, cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio consumado, en perjuicio de Cecilia Pamela Costa Paredes, a veinte años de pena privativa de la libertad, la misma que será cumplida en su domicilio señalado en autos, hasta que se recupere y pueda valerse por sí mismo, previa evaluación por profesionales especializados, quienes informarán sobre su estado de salud cada seis meses a fin de evaluar su internamiento en una cárcel pública, en donde deberá continuar el término de la condena; inhabilitación para aproximarse o comunicarse con los familiares de la víctima por el plazo de diez años, de conformidad con el artículo 36, inciso 11, del

Código Penal; y, fijó en S/ 1 000 000.00 (un millón de soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de los herederos de la agraviada.

Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema **PACHECO HUANCAS**.

CONSIDERANDO

I. IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación¹, se imputa a César Adolfo Canales López, haberle quitado la vida a su expareja sentimental Cecilia Pamela Costa Paredes, por su condición de tal, en mérito al siguiente hecho:

El imputado César Adolfo Canales López, quien portaba un arma de fuego, venía ejerciendo actos de control en su quehacer diario, sobre su expareja sentimental Cecilia Pamela Costa Paredes, la vigilaba, seguía, esperaba y realizaba actos para presionarla psicológicamente, generando miedo en la misma con el propósito de tenerla bajo su dominio, pues no aceptaba el fin de su relación sentimental.

En este contexto de acoso sexual contra la víctima, el 28 de julio de 2019, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando la agraviada, después de haber asistido a una reunión familiar, retornó a su domicilio sito en pasaje Jesús María N.º 175, en el distrito de Jesús María. En esos momentos, el padre de sus hijos Julio César Chang Vargas, le indicó que su ex enamorado César Adolfo Canales López, estaba estacionado en la puerta de ingreso de su domicilio, al interior de una camioneta marca KIA, color blanco, modelo Sportage, placa Cl6-422 y que quería hablar con ella.

Ante ello, la agraviada salió del inmueble e inició una discusión con el imputado en el interior de dicho vehículo. Este se negaba o aceptar la ruptura de la relación sentimental que habían mantenido aproximadamente por cuatro meses, por lo que, de manera constante la venía acosando, persiguiendo y vigilando, estacionando en reiteradas oportunidades su vehículo al frente de la vivienda de la agraviada. En medio de la discusión, esta última bajó del vehículo, pero fue interceptada por el imputado, quien también bajó del auto, para seguidamente cogerla del cuello y provisto de un arma de fuego de su propiedad, marca Tanfoglio, calibre 380 ACP, serie AA19051, le disparó en la frente.

La víctima cayó al suelo e inmediatamente después, el imputado se disparó a la altura de la cabeza con la misma arma, quedando ambos tendidos en el pavimento; todo ello fue observado por los testigos directos Carmen Soledad Ramírez Salazar y Carlos Alberto Costa Salvador. Momentos después, al presentar el imputado signos vitales, fue trasladado al hospital Santa Rosa del distrito de Pueblo Libre.

¹ Cfr. páginas 1262-1289 del expediente principal.

Posteriormente, conforme al acta de levantamiento de cadáver, el diagnóstico presuntivo de la muerte de la víctima fue: “Herida penetrante en cabeza, por proyectil de arma de fuego a determinar en necropsia de ley, el cual fue corroborado con el informe policial de necropsia médico legal que concluyó: “Del análisis de la necropsia médico legal y de los exámenes de laboratorio solicitados, al momento de la misma, la causa de la muerte de Cecilia Pamela Costa Paredes fue laceración encefálica y herida penetrante en cabeza, causada por proyectil de arma de fuego. De acuerdo a las características del orificio de ingreso, presenta signos de que el mismo se ejecutó a corta distancia”.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria² en contra de César Adolfo Canales López y declaró probadas las premisas siguientes:

- 2.1.** El acusado y la agraviada tenían una relación sentimental de pareja y ello quedó acreditado con las fotografías que obran en autos y las testimoniales. Al término de la relación, el acusado la perseguía, acosaba y le insistía en retomar su vínculo sentimental, pero la víctima se negaba.
- 2.2.** La declaración de Julio César Chang Vargas (ex pareja de la agraviada y padre de sus hijos), acredita que el acusado se presentó el día de los hechos al domicilio de la agraviada, manteniéndose en el exterior a bordo de un vehículo. Le insistió para conversar con él, pero este no le tomó importancia y al ingresar al inmueble de la agraviada, le dijo que el acusado estaba afuera buscándola.
- 2.3.** El día de los hechos, el acusado y la agraviada estuvieron juntos afuera del inmueble ubicado en el jirón Jesús María N.º 175, en el distrito de Jesús María, la agraviada salió de su domicilio y subió al vehículo del acusado, al interior discutieron, después que ella bajó, él también lo hizo, luego la tomó del brazo y del cuello, para seguidamente dispararle en la cabeza y dispararse también él, todo ello en presencia de Carlos Alberto Costa Salvador y Carmen Soledad Ramírez Salazar, quienes ratificaron sus declaraciones en juicio oral.
- 2.4.** Existen declaraciones de testigos que acreditan que la agraviada recibía llamadas insistentes de parte del acusado, además de mensajes. E incluso, le pedía su ubicación y la esperaba afuera de su domicilio por horas. La propia hermana del acusado -Carmen Franco López-, relató que este se obsesionaba, le gustaba estar detrás de esa persona y que en sus relaciones pasadas se deprimía y se encerraba.
- 2.5.** La declaración de los testigos presenciales, cumple con los requisitos del Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116.

² Cfr. páginas 1490-1511 del expediente principal.

- 2.6. La prueba actuada enerva la presunción de inocencia del acusado, acreditando el delito y su responsabilidad penal.
- 2.7. Todas las evaluaciones médicas practicadas al acusado, lo descalifican para ser internado en un establecimiento penitenciario debido a las secuelas neurológicas que presenta y su estado de dependencia, incluso el INPE informó que no cuenta con un tópico de salud a cargo de un técnico en enfermería, así como tampoco con sala de observación u hospitalización, por lo que su internamiento pondría en riesgo su vida.
- 2.8. El acusado tiene una condición especial generada por su estado de salud, que sumado a la pandemia de la COVID-19, llevan a la necesidad de adoptar medidas alternativas.
- 2.9. La sanción debe imponerse dentro del tercio inferior, atendiendo a los principios de humanidad, proporcionalidad y razonabilidad.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El recurrente César Adolfo Canales López, en su recurso de nulidad fundamentado³, postula como pretensión la nulidad de la sentencia. Censura lo siguiente:
 - 3.1. Se aplicó una doble medida de restricción sobre el imputado, al haberse decretado en su contra la medida coercitiva de prisión preventiva, con una interpretación análoga sobre arresto domiciliario. Además, cuando solicitó la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario, su solicitud fue entendida y tramitada como un cese de prisión preventiva, lo cual vulnera el principio de congruencia procesal. Las medidas coercitivas son excluyentes y no conjuntas, por lo tanto, una doble restricción es inconstitucional.
 - 3.2. El juicio oral es nulo debido a que no se debatió la suspensión por su condición médica, vulnerándose el derecho a su defensa y al debido proceso. No se tomaron en consideración los múltiples informes médicos que obran en autos, así como tampoco el informe de parte presentado en septiembre de 2020.
 - 3.3. Es una persona postrada en cama, con secuelas neurológicas permanentes, sin una parte del cerebro, sin movilidad locomotora, con asistencia permanente por terceros y limpieza asistida.
 - 3.4. Su declaración instructiva es nula, puesto que él y su defensa no fueron notificados para dicha diligencia; sino para una audiencia de ratificación de informes médicos, la cual fue aprovechada por la juez para tomarle su declaración instructiva.

³ Cfr. páginas 1520-1528 del expediente principal.

- 3.5.** El acoso y hostigamiento hacen referencia a cualquier acto de violencia sexual contra las mujeres, lo cual no ha sido demostrado, por lo que no se trata de un delito de feminicidio. La madre de la agraviada, su tío y el padre de sus hijos, al concurrir a juicio oral han señalado que desconocían que la víctima era acosada, también si eran pareja sentimental o tenían una relación laboral y que la hostigara constantemente.
- 3.6.** Carmen Soledad Ramírez Salazar y Carlos Alberto Costas, al concurrir a juicio oral, precisaron que no saben nada de lo ocurrido. Es falso que se hayan ratificado en sus declaraciones en sede policial.
- 3.7.** La inimputabilidad no ha sido discutida a pesar de haberse demostrado que padecía de enfermedad mental antes de los hechos punibles. Es un ex oficial de la aviación sociópata. En un accidente no esclarecido ocurrido a los 29 años de edad, se dispara con su armamento de reglamento, es curado en el hospital de la FAP. Después de ser atendido durante ocho meses fue dado de baja. Tuvo varios intentos de suicidio y recurría a ansiolíticos. Todo ello se respalda en el informe psiquiátrico de la Clínica Gonzáles.
- 4.** La representante del Ministerio Público, en su recurso de nulidad fundamentado⁴, postula como pretensión que se declare haber nulidad en el extremo de la pena impuesta al acusado; y, reformándola, la sanción sea elevada a 26 años y 8 meses de pena privativa de la libertad, dejándose sin efecto su suspensión. Censura lo siguiente:
- 3.1.** La sanción fue ubicada en el extremo mínimo del marco punitivo, sin tener en cuenta que en la acusación se invocó la circunstancia agravante genérica, prevista en el artículo 46, inciso 2, literal m), referida al uso de arma de fuego para la comisión del delito.
- 3.2.** Concorre una circunstancia atenuante genérica (carencia de antecedentes penales) y una agravante (uso de arma), por lo que la pena debe situarse en el tercio intermedio. En consecuencia, la pena debe ser elevada a 26 años y 8 meses.
- 3.3.** Respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, esta no tiene amparo legal, toda vez que incumple lo previsto en el artículo 57 del Código Penal. Así las cosas, debió ponerse al imputado a disposición del INPE a efectos de que se dé cumplimiento a la ejecución de la pena, teniendo en cuenta el estado de salud del interno. Ya en esas condiciones, sería de aplicación el artículo 82 del Código de Ejecución Penal, que prevé la posibilidad de que un interno pueda ser trasladado a un establecimiento de salud público o privado, previa evaluación del personal especializado.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

⁴ Cfr. páginas 1516-1518 del expediente principal.

5. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de feminicidio consumado y subsumidos en el inciso 2 del artículo 108-B del Código Penal, invocándose además para la determinación de la pena, la agravante prevista en el inciso m), del artículo 46 del mismo texto normativo, relativo al uso de armas para la comisión del delito. Finalmente, el Ministerio Público invocó los siguientes textos normativos:

Artículo 108-B. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual [...].

Artículo 46.2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: [...] m) Cuando para la realización de la conducta punible, se han utilizado armas [...].

V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. Anticipa este Supremo Tribunal que, conforme a la plataforma fáctica y circunstanciada de la conducta atribuida al acusado César Adolfo Canales López, descrita en el fundamento 1 de la presente ejecutoria, es obligación y responsabilidad de los jueces y juezas identificar que estamos ante un asunto de violencia contra la mujer —o violencia de género— y, en tal marco, diversas disposiciones de orden interno e internacional de derechos humanos obligan a los operadores jurídicos a dar respuesta a estos casos usando la herramientas de la perspectiva de género como instrumento de identificación de categorías sospechosas de discriminación a la mujer o estereotipos de género en la valoración de la prueba, garantizando el cumplimiento de los principios rectores de igualdad y no discriminación de la víctima, así como los derechos de la persona imputada.

7. Esta perspectiva de género es entendida como aquella “categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico”. [Scott W., Joan “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en Martha Lamas Compiladora, *El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual*, PUEG-UNAM, México, 1996].

La preocupación generada a causa de la violencia contra la mujer ha permeado a organismos internacionales como las Naciones Unidas, obligándolos a generar instrumentos que permitan tomar conciencia de la asimetría histórica de desigualdad y discriminación que viven las mujeres. Ello ha llevado a tomar un conjunto de medidas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y se han emitido distintos instrumentos de *Soft Law* y de obligatorio cumplimiento, tales como la Declaración sobre la Eliminación de la discriminación contra la mujer —1967, Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —1981 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) —1995.

La Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) está orientada a lograr ese reto de erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el artículo 2, ha impuesto a los Estados un conjunto de obligaciones, entre ellas, adoptar en el derecho interno legislaciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, complementar sanciones por la discriminación de la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con los del hombre y garantizar, por los operadores jurídicos nacionales competentes y otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Igualmente, la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer—1993, definió la violencia en el marco que esta constituye una violación de los derechos humanos y la expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Además, en el artículo 4 obliga a los Estados a adoptar las medidas eficaces para erradicarla, entre ellas, actuar con diligencia para prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer, desde distintos ángulos jurídico, político, administrativo, legislativo y cultural.

8. En el contexto regional, los Estados Americanos suscribieron la Convención Americana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará” —1994, ratificada por Perú el 4 de abril de 1996 y depositada 4 de junio del mismo año. Aquí se fijaron estándares de protección para las mujeres en escenarios públicos o privados. El artículo 7 de la Convención impuso a los Estados el deber de implementar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y obliga a las instituciones judiciales:

“[...] f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces [...]”.

Esta Convención nos ilustra sobre lo que debemos entender por violencia contra la mujer, que es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado, a su vez que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

9. En el plano interno la Constitución Política de 1993 en su artículo 2, inciso 1, prescribe que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Y en el inciso 2 del mismo dispositivo, garantiza la igualdad ante la ley al prescribir que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquiera otra índole.

Así, la Ley N.º 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 5 concibe a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales en el ámbito público como en el privado, e incorpora, en su artículo 3, el enfoque de género. Debiendo puntualizar que, en esa dirección de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, también se cuenta en el plano interno con la Ley N.º 28983 - Ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres.

En tal virtud, ante hechos constitutivos de violencia contra la mujer, el juez o jueza debe usar todo el bloque de constitucionalidad vinculado a las obligaciones y garantías del Estado Peruano frente a la violencia contra la mujer y la jurisprudencia de esta Suprema Corte que está en armonía con la jurisprudencia convencional. La valoración de los hechos y la colección de pruebas legítimamente incorporadas se limitan a los estándares jurisprudenciales.

VI. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

10. El marco sobre el cual se analizará el recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

11. En el presente caso, los agravios planteados por el recurrente están dirigidos a cuestionar la vulneración del derecho de defensa al no haberse suspendido el juicio oral a pesar de su condición médica de secuelas neurológicas permanentes, la condición de inimputable que el imputado se adjudica, la misma que sería sobreviniente a los hechos; y finalmente, la actuación y valoración probatoria. El recurrente no cuestiona el hecho de que él haya dado muerte a la víctima, ni la materialidad del delito, puesto que esta quedó acreditada con el acta de levantamiento del cadáver y el informe pericial de necropsia médico legal. Además, dan cuenta de su participación las declaraciones de los testigos presenciales Carlos Alberto Costa Sandoval y Carmen Soledad Ramírez Salazar - tíos de la agraviada-, quienes lo ubican en el lugar de los hechos junto a la víctima y observaron cuando le disparó y luego se disparó.

12. Ahora bien, para abordar los argumentos de la defensa, por una cuestión de orden será necesario verificar en primer lugar si existió o no alguna vulneración al derecho de defensa del recurrente, sustentada en la imposibilidad de que comprendiera las actuaciones realizadas en juicio oral.

13. Este reclamo del recurrente incide en dos supuestos: El primero es que alega que no se discutió en el proceso su inimputabilidad que padecía antes de los hechos, al señalar que es un sociópata al haberse disparado cuando tenía 29 años de edad y haber tenido varios intentos de suicidio y segundo apeló a la figura de la restricción de su capacidad de ejercicio procesal para actuar en los debates

orales, que está referida a la imposibilidad fáctica y objetiva de intervenir de forma voluntaria y consciente en el proceso penal. Es decir, censura su condición de inimputabilidad como circunstancia sobrevenida de los hechos materia de este proceso. Así, el primer cuestionamiento afecta directamente a la acción o capacidad psicofísica de comprender el carácter delictivo de su acto, vinculado a las eximentes de responsabilidad del artículo 20 del Código Penal. Y, lo segundo a una causal sobrevenida a los hechos de incapacidad de ejercicio procesal. Es decir, ambos reclamos deben verificarse si fue ex ante o posterior a los hechos materia de imputación; puesto que, cada supuesto tiene consecuencias distintas.

Entre las circunstancias que afectan la capacidad de ejercicio procesal tenemos a los supuestos de anomalía psíquica, alteración de la conciencia o de percepción y otros estados patológicos que afecten gravemente el concepto de realidad. Aquí no cabe la representación legal. (Recurso de Nulidad N.º 745-2019, Lima, fundamento jurídico N.º 24).

14. El Código de Procedimientos Penales no regula específicamente pues, la figura de falta de capacidad procesal para ser sometido a proceso penal, como consecuencia de la inimputabilidad por anomalía psíquica sobrevenida al delito. Pero ello no quita la posibilidad de determinarla, a la luz de la Constitución y en forma extensiva, resulta de aplicación el Código Procesal Penal —de vigencia paralela— sí lo estipula en su artículo 76.

Artículo 76. Anomalía psíquica sobrevenida

1. Si después de cometido el delito le sobreviene anomalía psíquica grave al imputado, el juez de la Investigación Preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, ordenará, de oficio o a solicitud de parte, la realización de un examen por un perito especializado. Evacuado el dictamen, se señalará día y hora para la realización de la audiencia, con citación de las partes y de los peritos
2. Si del análisis de lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la causa, dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. Si fuere necesario, ordenará su internamiento en un centro hospitalario especializado.
3. La suspensión del proceso impedirá la declaración del imputado o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se prosiga con la investigación del hecho o que continúe la causa respecto a los demás coimputados.

La norma del Código Procesal Penal no alude a un archivamiento definitivo de la causa, pues solo establece la posibilidad de suspender el proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo, ello debido a que no es posible enjuiciar a quien no es capaz de entender lo que en él ocurre, dado que esto afectaría el contenido esencial del ejercicio del derecho de defensa.

15. En este escenario, de las actas de los debates orales se advierte que durante la primera sesión de audiencia llevada a cabo el 7 de septiembre de 2020, la defensa del imputado señaló lo siguiente: “Mi cliente es una persona que está postrada en cama, tiene una herida profunda en el cráneo, no se mueve, en todos los informes médicos que se realizaron, más de 10, él se encuentra en esa condición, mi cliente

no es una persona cualquiera, es una persona que no sabe en qué realidad vive”. Ante ello, la Sala Superior dispuso que se realicen las coordinaciones pertinentes a fin de solicitar un informe actualizado sobre su estado de salud.

En la segunda sesión de audiencia se continuó con el ofrecimiento probatorio, aportando la defensa del imputado el Informe Pericial Ampliatorio Médico Criminalístico de Parte N.º 031-2020, documento en cuyas conclusiones figura lo siguiente: “[...] continúa con un pronóstico incierto en cuanto a su desenvolvimiento intelectual y sociabilización [...] producto de la lesión por proyectil de arma de fuego, como es evidente, ha perdido parte de la corteza prefrontal bilateral, daño en su estructura cerebral que es de tipo permanente e irreversible y que de acuerdo a las conexiones cerebrales comprometidas le ocasiona sintomatología diversa, que puede mejorar en parte con medicina y rehabilitación física [...] El síndrome disejecutivo o frontal es un problema que puede presentar distintos tratamientos según el tipo de fenómeno que lo causa [...] de acuerdo con la evolución de su lesión, está presentando (el imputado) un síndrome disejecutivo, al momento presenta aun dependencia de otras personas, para su alimentación, movilización, aseo personal y recambio de pañales, aunado a procedimientos de rehabilitación que permitan que pueda establecer relaciones con su entorno, así como seguimiento de su esfera psicológica, procedimientos que va a requerir de manera diaria y constante [...]”.

No obstante a ello, en la tercera sesión de audiencia, al ponerse en conocimiento la recepción formal del mencionado informe, el representante del Ministerio Público señaló que en autos obraban los diagnósticos médicos del recurrente, en los cuales se indicó que se encontraba estable y por tanto de alta. Además, precisó que la única limitación del imputado era motriz; y, por tanto, solicitó que se continúe la audiencia vía Google Meet. Ante ello, el Colegiado señaló que, si bien debían tenerse en cuenta los informes médicos, el proceso debía continuar.

Efectivamente, el proceso continuó, a pesar que el abogado defensor del imputado señaló en numerosas oportunidades que este no podía hablar, dejándose constancia en diversas ocasiones que se encontraba inconsciente y no contestaba. En esas condiciones, el representante del Ministerio Público le leyó los cargos, fue sometido al interrogatorio y a las demás etapas del juicio oral, precisándose en las actas que el imputado guardó silencio.

16. En este contexto, es necesario verificar si existe documentación que dé cuenta del estado de salud en el que se encontraba el recurrente al ser sometido al juicio oral. Así, inicialmente en el Certificado Médico Legal N.º 045245-V del 29 de julio de 2019, se precisó que el acusado se encontraba en estado de coma profundo debido a las lesiones traumáticas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Al Informe Médico de Essalud del 16 de septiembre de 2019, suscrito por Mónica Tatiana Terry Mora, jefa de medicina interna, el imputado presentó en su evaluación por neurología: “expresión verbal espontánea nula, no emite sonidos, entiendes órdenes simples y complejas, no déficit motor ni sensitivo. Sugiere no

internarlo en un establecimiento penitenciario y la no permanencia del paciente en centro hospitalario por riesgo de infecciones nosocomiales”.

17. El 17 de septiembre de 2019, se formularon los Certificados Médicos Legales números 055400-PF-AR y 055465-V, en el primero de ellos se precisó que el imputado no estaba en condiciones de ser trasladado a un establecimiento penitenciario; mientras que en el segundo se indicó lo siguiente: “expresión verbal espontánea nula, no emite sonidos, entiende órdenes simples y complejas, no déficit motor ni sensitivo, esboza sonrisa social; con afasia de conducta atípica, con adecuada evolución del estado anímico depresivo reportado por psicología”.

18. Posteriormente, en el Informe médico de Essalud del 2 de octubre de 2019, suscrito por Mónica Tatiana Terry Mora, en su condición de jefa de medicina interna, se mencionó que puede movilizar las cuatro extremidades y emitir palabras, pero no deglutir. Además, se reiteró la sugerencia de no mantener al paciente en el centro hospitalario por riesgo de infecciones nosocomiales. La mencionada médica, Mónica Tatiana Terry Mora, se ratificó el 3 de octubre de 2019 y señaló que el acusado no podía valerse por sí mismo, obedecía algunas palabras, no estaba orientado en tiempo y lugar, pero sí en persona, hablaba un poco más, saludaba, obedecía órdenes complejas como decir su nombre, porque entendía y respondía, movía los pies, habiendo mejorado desde su primera evaluación. Sin embargo, la médica señaló: “Su evolución es cambiante, un día puede hablar y al otro no”.

19. El Certificado Médico Legal N.º 060092-PF-AR del 9 de octubre de 2019 suscrito por Roger Pacheco Carranza, concluye que: “Presenta síndrome pre frontal, apático, abúlico, es decir, caracterizado por la depresión, la apatía, retardo psicomotor, pérdida de interés, lentificación, problemas de memoria y concentración [...]”. Este fue ratificado el 10 de octubre de 2019, oportunidad en la que precisó: “es lento en sus respuestas, no es coherente ni sus respuestas son inmediatas, así como sus movimientos. Es un paciente postrado. [...]”.

20. De otro lado, según el Informe Pericial Médico Criminalístico de parte, el imputado presenta: “alteraciones del conjunto de las funciones cognitivas, además de las afectivas”. En el mencionado documento, el médico Juan C. Leiva Pimentel consignó lo siguiente: “presenta una zona traumática a nivel frontal, pérdida de volumen con ausencia de estructura ósea por la grave lesión de los lóbulos frontales del cerebro. Dichos pacientes desarrollan el Síndrome Disejecutivo, ya que limita la conexión entre el área frontal (ejecutiva) y el resto de la información cerebral [...]. Tampoco es extraño que dependen de instrucciones ajenas para poder realizar sus funciones [...]. De acuerdo con la evolución de la lesión, está presentando un Síndrome Disejecutivo, al momento presenta aún dependencia de otras personas, para su alimentación por sonda nasogástrica, aseo personal y recambio de pañales, aunado a procedimientos de rehabilitación que permitan que pueda establecer relaciones con su entorno, así como un seguimiento de su esfera psicológica, procedimientos que va a requerir de manera diaria y constante”.

21. A ello se suma que en el Certificado Médico Legal N.º 072933-V del 6 de diciembre de 2019, se dejó constancia que el imputado respondió al interrogatorio médico; sin embargo, se recomendó una nueva evaluación neurológica y de medicina física. Por otra parte, en la Pericia Psicológica N.º 73806-2019-PS-VD del 11 de diciembre de 2019, se consignó que el imputado relató algunos sucesos, pero no recuerda lo que pasó el día de los hechos, solo lo que le contaron. En esta instrumental se concluyó que tiene funciones cognitivas disminuidas en atención, concentración y curso del pensamiento. Personalidad con rasgos histriónicos e inestables, sugiriéndose evaluación psiquiátrica.

22. En el Dictamen Pericial de Medicina Forense N.º 7020/19 del 23 de diciembre de 2019, se precisó que el imputado esta: “Orientado en tiempo, espacio y persona. Responde preguntas lentamente, pide que se repitan las preguntas, refiere que no entiende, aunque responde adecuadamente. Tiende a la labilidad emocional, refiere estar triste por su situación actual. No camina desde el evento. [...]”. Finalmente se indicó que el acusado, no es apto para ser internado en cárcel pública por no tener control de esfínteres, no poder caminar y no poder comer por boca y propia mano. Dicho documento fue suscrito por María del R. Peña Vargas Perito Anatomo Patólogo Forense.

23. Al año siguiente, conforme al Certificado Médico Legal N.º 002575-V-D del 17 de febrero de 2020, se dejó constancia que el imputado se encontraba: “orientado en tiempo, espacio y persona, presentó pausas al responder, hemiprecia a predominio izquierdo [...]”. Concluyéndose que presenta síndrome prefrontal, apático-abúlico por TEC, que se encuentra clínica y hemodinámicamente estable al momento de la evaluación, con secuelas neurológicas (limitación para la deambulación, utiliza pañal para micción y deposición, dependiente de sonda nasogástrica para la alimentación) que interfieren con sus actividades cotidianas y que lo hacen dependiente, requiriendo asistencia y cuidado personalizado. En el documento se reiteró que se requiere informe médico de evaluación por el Instituto Nacional de Rehabilitación y/o servicio de medicina física y rehabilitación de Essalud para determinar el grado de discapacidad y realización de tratamiento subsecuente. La instrumental fue suscrita por Luis Carlos Salas Mayta.

24. Finalmente, en el Certificado Médico Legal N.º 011556-V-D del 17 de febrero de 2020, se dejó constancia que el acusado se encontraba orientado en espacio y personal, parcialmente orientado en tiempo, presenta pausas al responder. En este, el especialista Luis Carlos Salas Mayta concluyó que el imputado: “se encuentra en evolución estacionaria, con diagnóstico de síndrome prefrontal, apático-abúlico por TEC, que se encuentra clínica y hemodinámicamente estable al momento de la evaluación, con relación a su condición. Presenta secuelas neurológicas (limitación para la deambulación, utiliza pañal para micción y deposición, dependiente de sonda nasogástrica para la alimentación) que interfieren con sus actividades cotidianas y que lo hacen dependiente, requiriendo asistencia y cuidado personalizado”. Se reiteró que se requería informe médico de evaluación por el Instituto Nacional de Rehabilitación

y/o servicio de medicina física y rehabilitación de Essalud para determinar el grado de discapacidad y realización de tratamiento subsecuente.

25. De lo anteriormente señalado se advierte que los médicos que, si bien se le dio de alta el imputado, ello no se debió a que se encontrara en mejores condiciones neurológicas, sino que tuvo como propósito evitar que adquiriera alguna enfermedad intrahospitalaria. No obstante a ello, en el transcurso del proceso, se entrevistó al imputado en dos ocasiones, mientras se encontraba internado, una de ellas el 3 de octubre de 2019 y la otra el 6 de diciembre de 2019. Es decir, con anterioridad a las evaluaciones médicas más recientes.

26. Todo ello reflejaría que la sentencia impugnada habría sido emitida cuando el imputado padecía las consecuencias neurológicas de las lesiones por arma de fuego que se infirió en la cabeza. Es decir, no se tiene certeza si al momento de los hechos padecía de una anomalía psíquica, alteración de la conciencia o de percepción u otros estados patológicos que hayan afectado gravemente su concepto de la realidad y si luego de los mismos el recurrente se encontraba o no imposibilitado de ser interrogado y de comprender en su integridad la decisión dictada en su contra. Entonces, con la finalidad de verificar el primer reclamo del impugnante y el segundo respecto a la real restricción de la capacidad procesal para actuar en juicio del imputado; resulta necesario e inexorable que se ordene la evaluación del imputado por parte de los peritos del Instituto de Medicina Legal, a fin de que formulen una pericia neurológica y una psiquiátrica. Esta última deberá determinar dos aspectos: **i)** si en función a sus antecedentes el recurrente era inimputable a la fecha de los hechos; y, **ii)** si en la actualidad su condición psiquiátrica impide o no que participe del juzgamiento. Para la elaboración de ambas pericias deberán proporcionarse a los especialistas copias certificadas de las evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas que obran en autos. Finalmente, de ser el caso, el imputado deberá ser sometido a una junta médica para determinar si se encuentra en condiciones de participar de continuar con el proceso oral.

27. En ese sentido, se advierte que la Sala Superior, pese a las recomendaciones efectuadas en los certificados médicos legales y la pericia psicológica, no se cercioró que el imputado contara con capacidad procesal para continuar participando en el proceso, por lo tanto, ha incurrido en la causal de nulidad prescrita en el numeral 1, del artículo 298, del Código de Procedimientos Penales, que establece que se declara la nulidad: “1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisión de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal”. Por lo tanto, es necesario rescindir la sentencia materia de grado, a fin de que el imputado sea evaluado por los especialistas correspondientes y de ser el caso, sea sometido al juzgamiento. Estas pericias deberán llevarse a cabo a la brevedad posible, teniendo en consideración la gravedad del delito materia de imputación, así como también la responsabilidad que el Estado peruano ha asumido internacionalmente ante este tipo de ilícitos penales.

28. Finalmente, dado que en la sentencia rescindida se aplicó pena efectiva, la cual el imputado ha venido cumpliendo en su domicilio debido a su estado de salud, corresponde ordenar el levantamiento del arresto domiciliario del recurrente César Adolfo Canales López. Sin embargo, en salvaguarda de que el proceso no sufra dilaciones indebidas a causa de una posible incomparecencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, deben dictarse las medidas de aseguramiento personal previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

- I. Declarar **NULA** la sentencia del 21 de diciembre de 2020, emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a **CÉSAR ADOLFO CANALES LÓPEZ** como autor del delito contra la vida, cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio consumado, en perjuicio de Cecilia Pamela Costa Paredes, a veinte años de pena privativa de la libertad, la misma que será cumplida en su domicilio señalado en autos, hasta que se recupere y pueda valerse por sí mismo, previa evaluación por profesionales especializados, quienes informarán sobre su estado de salud cada seis meses a fin de evaluar su internamiento en una cárcel pública, en donde deberá continuar el término de la condena; inhabilitación para aproximarse o comunicarse con los familiares de la víctima por el plazo de diez años, de conformidad con el artículo 36, inciso 11, del Código Penal; y, fijó en S/ 1 000 000.00 (un millón de soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de los herederos de la agraviada.
- II. **ORDENARON** se lleve a cabo un nuevo juicio oral, a fin de que previamente se realice una pericia psiquiátrica y neurológica al imputado, la misma que deberá ser formulada por peritos del Instituto de Medicina Legal, a fin de determinar si se encuentra en condiciones de comprender los cargos en su contra y participar en el proceso, conforme al considerando 26.
- III. **ORDENARON** el levantamiento del arresto domiciliario y dispusieron restricciones. **ESTABLECIERON** como reglas de conducta, que el recurrente: **i)** no se comunique con la familia de la agraviada; **ii)** no se ausente del lugar de su residencia, ni varíe su domicilio sin previa comunicación y autorización de la Sala Penal Superior; **iii)** someterse a los exámenes y pericias ordenadas; **iv)** estar presente en las audiencias.
- IV. **MANDARON** que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional que corresponda para los fines de ley. Notificándose a las partes procesales apersonadas a esta Sala Suprema. Hágase saber.

Intervino la jueza suprema Carbajal Chávez, por licencia de la magistrada suprema Castañeda Otsu.

S. S.

PRADO SALDARRIAGA

BROUSSET SALAS

PACHECO HUANCAS

GUERRERO LÓPEZ

CARBAJAL CHAVEZ

IPH/femh